

INTERVENCIONISMO

Los centros de datos denuncian el «señalamiento» y el «cerco regulatorio» del Gobierno

Daniel Caballero
Madrid

Los centros de datos cargan contra la intención del Gobierno, desvelada por ABC, de arrogarse capacidad de veto sobre las inversiones extranjeras en estas infraestructuras. Fuentes oficiales de la patronal SpainDC, que lleva semanas chocando con el Ejecutivo por otra regulación en la materia, explica su profunda preocupación por «el señalamiento a un sector que ya está sometido a una enorme incertidumbre regulatoria».

«España no puede decir que quiere atraer inversión digital y, al mismo tiempo, enviar la señal de que esa inversión estará bajo sospecha por el mero hecho de ser un centro de datos», indican desde la organización. Unas palabras en respuesta a la consulta pública del Ministerio de Economía en la que el departamento de Carlos Cuerpo revela que quiere ampliar aún más el llamado escudo antiopas, implantado por primera vez en 2020 y por el cual el Gobierno tiene capacidad de intervención en inversiones extranjeras en España en determinados sectores calificados como estratégicos. La patronal muestra, además, su enorme sorpresa por ser el único sector mencionado en la consulta pública. El cambio, en este caso, vendría al considerar a los centros de datos como estratégicos para que queden bajo el paraguas del escudo antiopas. Y la consulta pública, según desveló ABC, no solo abarca a la intervención del Ejecutivo en casos en los que una tecnológica extranjera vaya a comprar una infraestructura ya existente sino que también aplicaría en inversiones que parten de cero, es decir, por ejemplo cuando Amazon desde inicio compra un terreno y levanta su propio centro desde los cimientos.

Esta forma de articular la nueva normativa supondrá afectar a prácticamente todos los centros de datos, ya sean existentes de antes o nuevos proyectos. Además, en este caso concurre el hecho de que la amplísima mayoría de estas infraestructuras son propiedad y las explotan las grandes tecnológicas americanas como Amazon, Google, Meta, Microsoft, etc. Así, el Gobierno tendría capacidad de veto en toda operación que se moviera en este sector. «Plantear ahora una nueva capacidad de veto supone otra vuelta de tuerca y contribuye a aumentar la sensación de cerco regulatorio», apuntan.